

26 de abril de 2021
DP-OGD-0481-2021

Señora
Mariluz Jiménez Herrera
Correo electrónico: jlorena781@hotmail.com

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. En atención a su gestión formulada el 26 de abril del 2021, mediante la cual solicita a la Presidencia de la República ayuda para que le otorguen una pensión, por discapacidad; para su hijo, resulta pertinente indicarle que escapa del ámbito de competencia de este Despacho acoger su solicitud, ya que injerencias en los procesos de tramitación de pensiones, están prohibidas según la Ley No 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 52.- Tráfico de Influencias¹.

Entendemos y lamentamos su situación, no obstante, la única entidad autorizada para aprobar pensiones es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de acuerdo con las normas y procedimientos que la rigen.

Ante dicha situación, lo correspondiente es que plantee su solicitud ante la Sucursal de la CCSS en su lugar de residencia con los atestados, a la luz de la normativa vigente y de la tramitación y requisitos que ha establecido esa Entidad en materia de gestión.

¹**Artículo 52.- Tráfico de Influencias**, indica: “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaleándose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

26 de abril de 2021
DP-OGD-0481-2021
Página 2

Igualmente informamos que queda a valoración de la institución, la forma de atender la gestión, sin que esto implique la obligatoriedad de resolver favorablemente su petitoria.

En cuanto a su solicitud de vivienda, hemos trasladado su petición al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), mediante oficio DP OGD-0480-2021 para el conocimiento y lo que estimen pertinente.

De forma expuesta se atiende su gestión y se procede al archivo correspondiente.

Atentamente,

Alexa Benavides Ayala
Jefa
Gestión Documental
Presidencia de la República

ABA/LLQ